



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

ACUERDO 046/CQD/24-09-2021

**IEPC
GUERRERO**
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

QUE EMITE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO, RELATIVO A LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN SOLICITADAS EN EL EXPEDIENTE IEPC/CCE/PES/090/2021, FORMADO CON MOTIVO DE LA QUEJA Y/O DENUNCIA PLANTEADA POR LA CIUDADANA RUPERTA NICOLÁS HILARIO, MUJER INDÍGENA INTEGRANTE DE LA ETNIA ME'PHA, EN CONTRA DE LOS CC. ERIC SANDRO LEAL CANTÚ, EUGENIA CANTÚ CANTÚ Y SANDRA RAMOS TOMAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA PROPIETARIA Y SINDICA SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, POR ACTOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.

RESULTANDO

I. INICIO DE PROCESO ELECTORAL. El Consejo General de este Instituto, decretó el inicio del Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, el nueve de septiembre de dos mil veinte.

II. PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA. El diecinueve de septiembre de la presente anualidad, en la oficialía de partes de este Instituto Electoral, la ciudadana Ruperta Nicolás Hilario, mujer indígena integrante de la etnia me'pha, presentó escrito de queja y/o denuncia en contra de los CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas, quienes se ostentan como Presidente Municipal, Sindica Procuradora Propietaria y Sindica Suplente, respectivamente, por presuntos actos y/u omisiones que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género.

En su escrito, la promovente denunció esencialmente hechos que podrían constituir a su consideración acciones, e incluso tolerancia, basados en elementos de género ejercidos dentro de la esfera pública con el objeto o resultado de limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y electorales, esto es, la quejosa aduce el hecho de que los denunciados CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas, Presidente Municipal, Sindica Procuradora Propietaria y Sindica Suplente, respectivamente, al comparecer como terceros interesados al juicio de inconformidad TEE-JIN-

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**



**IEPC
GUERRERO**

COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

24/2021 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, al momento de dar contestación a los agravios planteados, manifestaron que las pintas tildadas de ilegales en el aludido juicio pudieron haberse prefabricado de forma posterior a la elección e incluso por el propio partido (MC) para utilizarlo como estrategia, lo anterior a consideración de la quejosa constituye violencia política contra las mujeres en razón de género.

III. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y MEDIDAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN. El veinte de septiembre de la presente anualidad, se tuvo por recibida la denuncia de mérito y radicándose bajo el número de expediente IEPC/CCE/PES/090/2021, y entre otras, se dictaron medidas preliminares de investigación con cargo a la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a efecto de que remitiera diversa información relacionada con el juicio de inconformidad TEE-JIN-24/2021.

Mediante proveído de veintitrés de septiembre de esta anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario General del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, mediante el cual remitió la información que le fue solicitada, y toda vez que se encontraban desahogadas las medidas preliminares de investigación que fueron decretadas y al considerar que en autos obraban elementos suficientes para continuar con el cauce legal del procedimiento y al no desprenderse causales notorias o evidentes de improcedencia, se admitió a trámite la denuncia planteada y se ordenó el emplazamiento de los denunciados, asimismo, se fijó fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

IV. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. Mediante diverso acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno auxiliar del expediente IEPC/CCE/PES/090/2021, se ordenó la elaboración del proyecto de acuerdo de medidas cautelares, así como su posterior remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que resultara conducente.

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, es competente para resolver sobre la procedencia o improcedencia de las medidas cautelares

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

solicitadas por el denunciante, de conformidad con lo estatuido en los artículos 435, segundo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 75, 79 y 122 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, los cuales esencialmente facultan a la aludida Comisión para dictar medidas cautelares que permitan lograr el cese de los actos o hechos que puedan constituir una infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o bien, evitar que se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales y legales de la materia.

En el caso, la competencia de este órgano colegiado se actualiza, porque las medidas cautelares se solicitan con base en la posible vulneración al principio de equidad en la contienda, lo anterior por presuntos actos anticipados de campaña.

II. HECHOS DENUNCIADOS Y MEDIOS DE PRUEBA. Como se ha señalado previamente, la promovente denunció medularmente la existencia de presuntos actos que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género.

MEDIOS DE PRUEBA

A) Medios de prueba ofrecidos por la denunciante:

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copias debidamente certificadas por el C. Daniel Ávila Santana, en su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta Regional, de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuarta Circunscripción Plurinominal Ciudad de México; del escrito de tercero interesado suscrito por los CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas en el juicio de inconformidad TEE-JIN-24/2021 que consta en el cuaderno accesorio único del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SCM-JRC-225/2021, promovido por Movimiento Ciudadano.

2. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO TANTO LEGAL COMO HUMANA.

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos expuestos en la presente queja y en obvio de mayores dilaciones se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen en todas y cada una de sus partes.

B) Medios de prueba recabados por la autoridad instructora:

- 1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en el oficio SGA-523/2021 signado por el Secretario General del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a través del cual remitió copia simple del cuaderno auxiliar del expediente TEE-JIN-24/2021.

III. CUESTIÓN PREVIA. Previamente a estudiar la procedencia de las medidas de protección solicitadas por la quejosa es conveniente destacar que, para revisar este asunto, esta Comisión de Quejas y Denuncias lo hará con perspectiva de género, dado que la actora señala que se cometió violencia política por razón de género en su contra¹.

La perspectiva de género es la metodología y mecanismo para estudiar las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres.

Juzgar con esta perspectiva implica reconocer la situación de desventaja particular en la cual históricamente se han encontrado las mujeres² -aunque no necesariamente está presente en todos los casos-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente existe en torno a la posición y rol que debieran asumir, como una cuestión inevitable e implícita a su sexo³.

¹ Esto, atendiendo a la tesis aislada 1a. CLX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro **DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015 [dos mil quince], tomo I, página 431).

² La perspectiva de género, como método analítico, debe aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres"; lo que fue establecido en la tesis 1a. LXXIX/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de rubro **IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, febrero de 2015 [dos mil quince], página 1397).

³ De acuerdo a la tesis aislada 1a. XXVII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte con el rubro **JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, marzo de 2017 [dos mil diecisiete], tomo I, página 443).

EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR

Así, la perspectiva de género obliga a las personas juzgadoras y a las autoridades administrativas con funciones materialmente jurisdiccionales a incorporar en los procesos administrativos o jurisdiccionales un análisis de los posibles sesgos de desequilibrio que, de manera implícita o explícita, puedan estar contenidos en la ley o en el acto impugnado⁴.

El Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad⁵ de la SCJN, es un instrumento que permite identificar y evaluar las circunstancias estructurales que perpetúan las violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexo-genérica de las personas.

Además, señala que juzgar con perspectiva de género implica tener cuidado especial al estudiar los “tratamientos jurídicos diferenciados” en un conflicto, pues es necesario determinar si tal diferencia es objetiva y razonable o si, por el contrario, es injustificada e implica una vulneración a los derechos de alguna persona por razón de género.

Para ello, propone estudiar si dicho trato diferenciado (i) implica la existencia subyacente de algún rol o estereotipo de género, (ii) encuadra en alguna categoría sospechosa, (iii) tiene por objeto o resultado, el impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, ejercicio o goce -en condiciones de igualdad- de los derechos humanos.

La aplicación de dicha metodología en un caso concreto según el Protocolo SCJN, sucede en diversas fases del proceso:

- **De manera previa o inicial:** es necesaria su aplicación para estudiar si es necesario otorgar medidas de protección y la admisibilidad del asunto.
- **En el estudio:** impacta el análisis de los hechos, la materia probatoria y la determinación del derecho aplicable.
- **En la resolución:** implica una argumentación jurídica especial y de ser procedente, la reparación del daño.

⁴ Así fue establecido por la Sala Superior al resolver el juicio SUP-JDC-1619/2016.

⁵ Publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2015 (dos mil quince) y consultable en: <https://www.scjn.gob.mx/registro/formulario/protocolo-para-juzgar-con-perspe>

EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR

Así, por lo que se refiere a la fase previa o inicial, cuando una autoridad tenga conocimiento de hechos de peligro en la integridad y vida de una víctima, se deben adoptar medidas necesarias para evitar alguna lesión o daño.⁶

IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES.

Relatado lo anterior, en específico los hechos narrados por la quejosa en su escrito de queja, permite vislumbrar de manera preliminar que su integridad física no se encuentra en riesgo, ya que no se advierten hechos que atenten contra la misma, esto es así, ya que de las constancias que obran en autos no se desprende que esté en riesgo o peligro inminente la vida de la denunciante, lo anterior con independencia de que, será en el momento procesal que la autoridad jurisdiccional determine la existencia o no de las infracciones atribuidas a los denunciados, en ese sentido conviene destacar las siguientes conclusiones preliminares:

- Que posteriormente a la realización de la jornada electoral (06 de junio), el catorce de junio de dos mil veintiuno, el representante del partido Movimiento Ciudadano acreditado ante el Consejo Distrital 28, con sede en Tlapa de Comonfort, interpuso juicio de inconformidad contra la elección del Municipio de Iliatenco, el cual fue radicado bajo el expediente TEE-JIN-24/2021.
- Que en el primero de los agravios que hizo valer en el juicio de inconformidad el representante de su partido (Movimiento Ciudadano), fue el relativo a la violencia política ejercida en su contra, mediante diversas pintas las cuales la discriminaban y ofendían, para sustentar lo anterior, exhibió una comparecencia ante el Juez Mixto de Paz del Municipio de Iliatenco.
- Que el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, los CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas, Presidente Municipal, Sindica Procuradora Propietaria y Sindica Suplente, comparecieron como terceros interesados al juicio de inconformidad TEE-JIN-24/2021, y esencialmente manifestaron en relación al primer agravio, que las pintas pudieron haber sido prefabricadas, incluso por la propia quejosa.

⁶ Artículo 40 de la Ley General de Víctimas.



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**



El escrito de los CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas, Presidente Municipal, Sindica Procuradora Propietaria y Sindica Suplente, en su carácter de terceros interesados del referido juicio, a consideración de la denunciante, constituye un acto violento que le impide ejercer sus derechos político-electorales, dado que en el mencionado escrito se aduce que la quejosa plantea cuestiones que le benefician e incluso que ella pudo fabricar para utilizarlo como estrategia de campaña.

- En ese contexto, la promovente estima que las manifestaciones de los denunciados realizadas en su escrito de terceros interesados, en específico las realizadas, en relación al primer agravio que hizo valer el representante del partido Movimiento Ciudadano en el juicio de inconformidad, constituye violencia política contra las mujeres en razón de género.

V. ANÁLISIS DE RIESGO

Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que como se mencionó previamente, de los hechos narrados por la quejosa no se advierte afectación alguna a la integridad física, por lo que previo al análisis de la procedencia o no de las medidas de protección cuando una autoridad se encuentra ante una solicitud de órdenes de protección debe:

- i) analizar los riesgos que corre la víctima para poder generar un plan acorde con las necesidades de protección, lo que involucra que, de ser pertinente, se realicen diversas diligencias.

Dependiendo del caso, tomando en cuenta la situación de la parte denunciante y a partir de la urgencia intrínseca de las medidas, es la propia autoridad que recibe la solicitud quien tiene que llevar a cabo tal análisis.

- ii) en caso de adoptar las medidas solicitadas, justificar su necesidad y urgencia, esto es, analizar las circunstancias que podrían derivar en un daño grave de difícil reparación a derechos como la vida, la integridad personal y la libertad.



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

iii) actuar con una debida diligencia en aras de que la autoridad facultada resuelva lo correspondiente respecto a la adopción de medidas, por lo que el dictado debe ser con prontitud y solo por el tiempo necesario para que la autoridad facultada para ello se pronuncie.

iv) analizar a qué autoridades estatales debe vincularse para efecto de que coadyuven con este órgano administrativo electoral en los casos en que deba garantizarse de manera preventiva la integridad de las mujeres que dicen ser víctimas de violencia política en razón de género.

Como se advierte, es necesario diseñar una metodología que se haga cargo de las particularidades derivadas del ejercicio de los derechos político-electorales, y que, a su vez, permita evaluar los riesgos que corre una víctima y, a partir de ello, generar un plan de protección adecuado a fin de que las medidas adoptadas sean eficaces.

Desde luego, esta metodología debe hacerse cargo de la opinión de quien solicita las medidas, lo que no implica trasladarle la responsabilidad de delinearlas, sino atender la problemática acorde a su situación particular.

En los términos relatados esta Comisión de Quejas y Denuncias procede a estudiar el riesgo en la cuestión planteada.

Como ya se mencionó, la actora señala que el hecho de que los aquí denunciados los CC.Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas, Presidente Municipal, Sindica Procuradora Propietaria y Sindica Suplente, al comparecer como terceros interesados al juicio de inconformidad TEE-JIN-24/2021, manifestaron que dichas pintas pudieron haberse prefabricado de forma posterior a la elección e incluso por el propio partido (MC) para utilizarlo como estrategia, por lo que, ello pone de manifiesto que los aquí denunciados cometieron violencia de género en su perjuicio, al tratar de inferir que las pintas las realizó como estrategia de campaña, ya que a su consideración el derecho a comparecer como tercero interesado no puede ser atribuible a menoscabar a la otra parte, ni de atribuirle más violencia.

En ese sentido, de forma clara no se desprende que esté en riesgo su integridad física o su vida, ya que bajo la apariencia del buen derecho el hecho



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

**IEPC
GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS**

denunciado de manera evidente no constituye una amenaza inminente que ponga en peligro alguno de sus derechos o su integridad física, además de que como se advierte de las constancias que integran el expediente principal, el acto que aquí se reclama resulta ser un **acto consumado**, ya que el escrito de terceros interesados, surtió sus efectos legales dentro del expediente TEE-JIN-24/2021, en el que Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, determinó lo conducente respecto al mismo mediante sentencia de cinco de agosto de dos mil veintiuno; es decir, ya surtió sus efectos legales, por ende su pretensión ya fue ejecutada, por lo que derivado del presente análisis esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que resulta improcedente la adopción de las medidas de protección solicitadas por la quejosa.

Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro; ***“ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE”***.

Ahora bien, toda vez que no se decretaron medidas de protección a favor de la quejosa, se procede a estudiar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante.

**VI. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
SOLICITADAS POR LA QUEJOSA.**

Esencialmente la quejosa aduce que el actuar de los denunciados, respecto del escrito de terceros interesados (aquí denunciados) en el juicio de inconformidad TEE-JIN-24/2021, le ha generado un daño moral, ya que a su consideración, es patente que él mismo pretende revictimizarla al aducir que las pintas fueron prefabricadas, para utilizarlas como estrategia de campaña, en razón de que a su consideración el derecho a comparecer como tercero interesado no puede ser atribuible a menoscabar a la otra parte, ni de atribuirle más violencia.

Precisado lo anterior, como medidas cautelares, la actora solicita lo siguiente:

- Se sancione en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a los CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Ramos Tomas, Presidente Municipal, Sindica Procuradora Propietaria y
Sindica Suplente, respectivamente.
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

- Se asienten los datos de los CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas, Presidente Municipal, Sindica Procuradora Propietaria y Sindica Suplente, en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Para analizar la procedencia o no de la solicitud realizada por la quejosa, es importante describir que la Sala Superior⁷ ha delineado que las medidas cautelares⁸:

- Constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia.
- Tienen como finalidad constituir un instrumento de protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello evada el cumplimiento de una obligación, se afecte algún derecho o se lesione un valor o principio protegido por el sistema jurídico.
- Tal protección debe dirigirse contra situaciones, hechos, conductas o determinaciones que constituyan una amenaza o afectación real, de manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, a través de medidas que cesen las actividades que causan el daño o prevengan el comportamiento lesivo.
- Los elementos básicos que deben analizarse para la procedencia de las medidas de protección, como instrumento que tiene la finalidad de lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, es evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios

⁷ En los recursos SUP-REP-152/2017 y SUP-REP-200/2020.

⁸ Ver. **Jurisprudencia 14/2015**, cuyo rubro es: **"MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA"**. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30.

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

IEPC
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

que rigen los procesos electorales, o que se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

En ese contexto, la Sala Superior ha considerado⁹ que, para el otorgamiento o no de una medida cautelar, el órgano facultado debe:

- Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación.
- El peligro en la demora, o la existencia de causas que justifiquen de manera fundada que, la espera de la resolución definitiva generaría la desaparición de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es irreparable.

El primer elemento, apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que, **el segundo elemento consiste, en la posible frustración de los derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.**

La situación mencionada obliga, indefectiblemente, a realizar una **evaluación preliminar** en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere una **acción ejecutiva, inmediata y eficaz**, que debe adoptarse mediante la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.

⁹ Ver las sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP-16/2017, SUP-REP-13/2017, SUP-REP-12/2017, SUP-REP-4/2017, entre otros.

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

IEPC
GUERRERO

IEPC
GUERRERO

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la autoridad, **necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad**, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad.

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que reúnan los requisitos apuntados, **solo proceden respecto de conductas que se refieran a hechos objetivos y ciertos, no así respecto de aquellos que se hayan consumado totalmente o futuros de realización incierta**, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños irreparables.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

Lo anterior encuentra sustento en lo conducente en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.**¹⁰

¹⁰ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18.

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**



**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Finalmente, se advierte que la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

En este sentido, la determinación de adoptar o no medidas cautelares responde a parámetros de ponderación diferentes a aquéllos vinculados con el fondo del procedimiento, pues en éstos se analiza no solo la existencia de la conducta o su veracidad, sino también la plena acreditación de la infracción, la responsabilidad de los sujetos denunciados y la sanción correspondiente.

Precisada la naturaleza de las medidas cautelares, se procede a verificar la procedencia de las medidas solicitadas por la quejosa.

Inicialmente, cabe destacar lo establecido en el artículo 439, párrafo cuarto, de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que a la letra dice;

“Artículo 439. (...)

La resolución del presente procedimiento especial corresponderá al Tribunal Electoral del Estado.”

Por su parte el referido artículo, dispone que la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a través de la Coordinación de lo Contencioso Electoral, será la encargada de la instrucción del procedimiento especial sancionador.

Asimismo, el artículo 75 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, establece que las medidas cautelares solo pueden ser dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Coordinación.

De lo anterior se puede desprender que de manera exclusiva el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, es el órgano encargado de dictar resolución en el procedimiento especial sancionador, es decir, será el facultado para estudiar las pretensiones de fondo que planteé cualquiera de las partes en el procedimiento, por lo que cualquier pronunciamiento en torno a la existencia o no de la infracción

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

que se denuncia es parte de la decisión de fondo que en su caso adopte el órgano jurisdiccional competente.

En ese sentido, y toda vez que la quejosa, solicita como medida cautelar que se sancione en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a los CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas, es inconcuso que tal solicitud, es improcedente, dado que no es jurídicamente factible que en sede cautelar se acoja la pretensión principal de la denunciante, ya que tal pronunciamiento lo hará en el momento procesal oportuno el órgano jurisdiccional de que se trate, además trastocaría el principio de seguridad jurídica de las partes en el procedimiento, ya que de realizar tal pronunciamiento en el presente acuerdo, implicaría prejuzgar los hechos materia de la denuncia, sin que se hubieran desahogado las etapas correspondientes del procedimiento, y por ende, tal determinación sería contraria al debido proceso que debe imperar en el presente asunto.

Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 8/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO. Si bien los derechos mencionados giran en torno al derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse presente que dichas prerrogativas son autónomas, con dimensiones y alcances propios que exigen desarrollos interpretativos individualizados que abonen en el entendimiento y configuración del núcleo esencial de cada derecho. Ahora bien, en cuanto al juicio de amparo, la Corte Interamericana ha establecido que éste se encuentra en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", reconociéndolo, por su naturaleza, como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada; el mismo Tribunal Interamericano precisó que el recurso consagrado en el aludido artículo 25 no es el recurso de apelación, el cual está previsto, en el artículo 8.2 h), del mismo tratado. Esta diferencia entre el derecho a la protección judicial y el derecho a la revisión, es de suma relevancia para entender cuándo se está en presencia del derecho a recurrir un fallo ante una

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**



**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

instancia superior, en respeto al derecho al debido proceso, y cuándo se está ante la exigencia del derecho a un recurso que ampare derechos fundamentales de fuente nacional o convencional, por tanto, el juicio de amparo debe considerarse como un medio de defensa diseñado para proteger los derechos consagrados en la Constitución y la Convención Americana, y no como un mecanismo de segunda instancia, esto es, un recurso que sirve de margen para la revisión de una decisión en el marco de un proceso.”

Ahora bien, por cuanto a su solicitud consistente en que se asienten los datos de los CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas, Presidente Municipal, Sindica Procuradora Propietaria y Sindica Suplente, en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, primeramente, conviene destacar que en la resolución del recurso de reconsideración SUP-REC-91/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual ordenó la creación del registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras cosas, se advierte que el aludido registro será únicamente para efectos de publicidad, como un mecanismo para cumplir deberes de reparación, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres, pues es una herramienta para que las autoridades y la ciudadanía tengan conocimiento de las personas que han incurrido en dichas conductas, sin que en forma alguna tenga efectos constitutivos, pues ello **dependerá de sentencias firmes de autoridades electorales jurisdiccionales. De tal forma que será en la sentencia en la que se determinará la sanción por violencia política contra las mujeres en razón de género y sus efectos.**

Por su parte del acuerdo INE/CG/269/2020 emitido por el Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobaron los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, reiteró que el Registro de Personas sancionadas, tendrá como objeto compilar, sistematizar y hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, **mediante Resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales federales y locales competentes.**



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

**IEPC
GUERRERO**
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

En ese sentido se considera que tal solicitud es **improcedente**, ya que la inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, constituye una sanción que en su caso, derivara de la resolución que emita el Tribunal Electoral del Estado o de ser el supuesto, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, aunado a que esta debe quedar firme o ejecutoriada, de conformidad con el artículo 125 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto; para que una vez firme la sentencia dar aviso al Instituto Nacional Electoral para su inscripción en el Registro Nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género, esto de conformidad a los Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral.

Por último, es conveniente precisar que la improcedencia de las medidas cautelares no prejuzga respecto a la existencia o no de las infracciones denunciadas, así como las medidas de reparación que en su caso se emitan, dado que dicho pronunciamiento corresponderá realizarlo de forma exclusiva al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el cual, al dictar la resolución de fondo en este asunto, determinará si con los medios convictivos que obren en autos se acreditan tanto las infracciones denunciadas, como la responsabilidad de los presuntos infractores.

En mérito de lo previamente expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 435, segundo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 75 y 79 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la Comisión de Quejas y Denuncias:

ACUERDA

PRIMERO. Es *improcedente* la solicitud de medidas de protección formulada por la C. Ruperta Nicolas Hilario, en términos de los argumentos esgrimidos en el presente acuerdo.

SEGUNDO. Es *improcedente* la solicitud de medidas cautelares formulada por la C. Ruperta Nicolas Hilario, en términos de los argumentos esgrimidos en el presente acuerdo.



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE:
IEPC/CCE/PES/090/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Notifíquese este acuerdo **personalmente**, a la ciudadana Ruperta Nicolas Hilario y **por estrados** a los denunciados y al público en general, de conformidad con lo establecido en el artículo 445 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 65 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

El presente acuerdo fue aprobado por **unanimidad** de votos de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de trabajo, celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.

IEPC
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

**C. VICENTA MOLINA REVUELTA
CONSEJERA PRESIDENTA**

**C. AMADEO GUERRERO ONOFRE
CONSEJERO ELECTORAL**

**C. EDMAR LEÓN GARCÍA
CONSEJERO ELECTORAL**

**C. AZUCENA ABARCA VILLAGÓMEZ
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN.**

Nota: Las presentes firmas corresponden al Acuerdo 046/SE/CQD/24-09-2021, que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, relativo a las medidas cautelares y de protección solicitadas en el expediente IEPC/CCE/PES/090/2021, formado con motivo de la queja y/o denuncia planteada por la Ciudadana Ruperta Nicolás Hilario, mujer indígena, integrante de la etnia Me'Pha, en contra de los CC. Eric Sandro Leal Cantú, Eugenia Cantú Cantú y Sandra Ramos Tomas, presidente municipal, síndica procuradora propietaria y síndica suplente, respectivamente, por actos que podrían configurar violencia política en razón de género.